

Transiciones en movimiento: La cultura de protesta en España y el ciclo de movilización global¹

Ángel Calle Collado (Universidad de Córdoba)
Manuel Jiménez Sánchez (Universidad Pablo de Olavide)

Introducción: el despegue de los nuevos movimientos globales

No cabe duda que el ciclo de protestas globales, que arranca a escala internacional en los finales de los 80 y los principios de los 90², ha marcado y nos permite servir de guía para una lectura de las movilizaciones acaecidas en los últimas décadas, y en particular de la sedimentación de nuevas culturas políticas de protesta en el Estado español. No obstante, la visibilidad pública de este fenómeno no acontece sino un par de lustros después.

En el año 2000, campañas como las celebradas contra la reunión del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial en Praga (2000), el (finalmente no celebrado) encuentro del Banco Mundial en Barcelona (2001) o la presidencia española de la Unión Europea (Enero-junio del 2002) situaron la movilización, sobre todo en términos mediáticos, a favor de una justicia global en el centro del panorama de protesta de este país. En particular, la participación en la campaña “Praga 2000” supuso un impulso decisivo para la propia organización del movimiento de justicia global (MJG) en nuestro territorio. La experiencia de las protestas de Praga tuvo un notable impacto en posteriores expresiones del MJG en este país, como fueron las campañas contra el Banco Mundial (Barcelona, junio 2001)³ y las que tuvieron lugar durante la presidencia española de la Unión Europea (primer semestre de 2002)⁴. Estas campañas supusieron importantes innovaciones en lo que se refiere a formas de organización, repertorios de acción y de discursos en el contexto español, así como la incorporación de una nueva generación de activistas (Jiménez 2006), los cuales habían jugado un papel de creciente protagonismo en el reciente ciclo doméstico de movilización (con referentes en las movilizaciones contra las reformas educativas, la reforma laboral, el Plan Hidrológico Nacional, el *Prestige*, la guerra de Irak, etc.).

¹ Este artículo está basado en una ampliación y una compilación de diferentes textos que analizan las dinámicas recientes de movilización social en el Estado español: Jiménez y Calle (2007, 2007b), Jiménez (2005, capítulo 2) y Calle (2005, 2007).

² Al hilo de las primeras cumbres alternativas (Berlín 1988), de los grandes encuentros (Río de Janeiro 1992) y de la gestación de redes internacionales como Vía Campesina (principios de los 90); ver Della Porta (coord.) (2007)

³ Como señalan Gomà y otros (2004: 10) a partir de diversas entrevistas a activistas esta campaña constituyó uno de los espacios unitarios más plurales, en términos de personas y grupos participantes, que se habían desarrollado en los últimos años en Barcelona y en Cataluña.

⁴ La iniciativa más destacada fue la Campaña contra la Europa del Capital y la Guerra. Las reuniones celebradas en Barcelona (15-16 de marzo) y Sevilla (21-22 de junio) atrajeron la mayor parte de los esfuerzos estatales dedicados a estas protestas. En Barcelona, unas 300.000 personas participaron en la principal manifestación, en la cual noventa y cuatro personas fueron arrestadas. En Sevilla, el número de participantes fue también alto (unas 100.000 personas), con tan sólo tres arrestos. En Madrid, otras cien mil personas participarían en la marcha celebrada durante el encuentro UE-América Latina en Mayo.

Estas movilizaciones pueden ser consideradas como la principal evidencia del nuevo ciclo de movilizaciones en el que el MJG desarrolla un rol central. Sin embargo, no emergieron súbitamente, como ya hemos indicado. Todo ciclo de protesta demanda la puesta en marcha de recursos de movilización y organizativos, así como un aún menos visible proceso de entrelazamiento, identificación colectiva y construcción de nuevos marcos de significado. El propósito de este trabajo es ofrecer una panorámica de la evolución de los movimientos sociales más radicales en el Estado español que nos permitirán comprender el reciente proceso de contestación. Las características de estos procesos de contestación reflejan tanto el legado de experiencias pasadas en el ámbito de las familias de movimientos de izquierdas, como la recreación de nuevas tendencias en el sector de estos movimientos sociales.

Por ello, es necesario comenzar este trabajo con una sección dedicada a situar los legados de la transición política en términos de cultura de movilización. La búsqueda de nuevos referentes de acción frente a esta cultura se irá dibujando a lo largo de los 90, eje de la segunda sección de este capítulo. Y desembocará, como veremos en el tercer apartado, en la sedimentación, más allá de ciclos de protestas y de movimientos sociales concretos, de los llamados *nuevos movimientos globales*, refiriéndonos con ello, a la irrupción de nuevos referentes de movilización en torno a una cultura de *democracia radical*.

1. Movimientos sociales de matriz izquierdista en España. Orígenes y legados

Bajo el amplio marco de acción colectiva que se desarrolló en oposición al régimen de Franco (mediada la década de los 70) se produjo una convergencia de una diversidad de movimientos sociales, entre los cuales, junto al movimiento obrero, estudiantes, movimientos vecinales y grupos nacionalistas (que acababan de aparecer) fueron particularmente activos (Castells, 1986; Laraña, 1999). Desde finales de 1960, estos grupos llevaron a cabo una tarea de sustitución de fuerzas y de complementariedad con respecto a los partidos políticos (Pastor, 1998:73). Con todo, el proceso de institucionalización democrática supuso una desmovilización gradual de aquellos actores cuyas demandas fueron incluidas en las nuevas agendas políticas, al mismo tiempo que líderes relevantes de estos movimientos pasaban a la arena institucional, especialmente en aquellos puestos de la administración que fueron ocupados gradualmente por la izquierda (y los nacionalistas periféricos).

El modelo de *transición pactada* contempló un acuerdo tácito entre las elites acerca de la necesidad de desmovilizar a la sociedad para asegurar una transición política exitosa, de acuerdo a su visión de la misma. La estrategia de desmovilización tuvo un impacto decisivo en el diseño de nuevas reglas en el juego político. Uno de los principales objetivos de esta estrategia fue reducir el número de actores sociales que podían participar en el proceso político (limitado a un cierto número de partidos y sindicatos) y el confinamiento de dicho juego político a la arena electoral. Este consenso favoreció una aproximación ideológica y programática entre los principales partidos políticos (Gunther, 1992: 40) así como el retraso en la puesta en marcha de reformas institucionales para el desarrollo de una sociedad civil democrática. Consecuentemente, más allá de la posibilidad de votar, la participación de la ciudadanía fue limitada (Pastor, 1999). Además, las restricciones y defectos de la administración franquista y su marco jurídico fueron “de facto” prorrogados (Gomà y Subirats, 1998: 9); y una parte importante del personal que detentaba puestos en la administración continuó en sus puestos y con sus prácticas. En el caso de las fuerzas de seguridad, este hecho llevó a que durante los primeros años de la democracia estas fuerzas llevaran a cabo una política de represión inspirada en métodos dictatoriales (Jaime-Jiménez y Reinares, 1998).

La transición democrática española no sólo estableció una estructura de oportunidades políticas cerrada para determinados intereses que fueron excluidos (tantos como los representados por los nuevos movimientos sociales), pero también, tal y como la literatura sobre transiciones ha subrayado, aquellas decisiones que se tomaron, con carácter temporal, en torno al diseño institucional, permanecieron inalteradas a lo largo del tiempo, determinando así el funcionamiento de la democracia una vez que el nuevo régimen se consolidó (Karl, 1990). Por ello, la reducción de competidores en la arena política que persiguió garantizar el éxito de la transición política resultó ser un factor estructural que determinó el mismo desarrollo de la democracia. En este sentido, en el caso de los partidos políticos españoles, la consolidación de la democracia no supuso la expansión de relaciones organizacionales con la sociedad civil, sino al contrario.

La evolución de los **movimientos vecinales** y **obrero** ilustran este patrón de desmovilización social. Las reclamaciones de mejores condiciones en aquellas ciudades que habían crecido rápidamente como consecuencia de las intensas emigraciones desde el campo jugaron un papel central en las protestas contra Franco. Los partidos políticos encontraron en estas protestas una plataforma para canalizar su acción política y para establecer conexiones entre los problemas materiales y las demandas por democratización. En los 60s, el movimiento vecinal se convirtió en el más importante (y en el más grande) de toda Europa (Castells, 1983). Sin embargo, la victoria de los socialistas y otros partidos de izquierda en las primeras elecciones locales abrió la puerta a la cooptación de este movimiento: sus

líderes se incorporaron a la administración pública y las demandas de sus movimientos fueron (*parcialmente*) integradas en las agendas políticas locales. Como parte de las estrategias de desmovilización, las asociaciones locales no fueron reconocidas como grupos de interés público en la Constitución, tal y como demanda el movimiento vecinal. Ni siquiera cuando los socialistas llegaron al poder, a pesar de lo que estaba reflejado en su programa político, el gobierno prestó atención al movimiento vecinal y a la participación ciudadana en general. A partir de ahí, el movimiento vecinal comenzó a declinar, decreciendo su activismo y su capacidad para conservar su independencia frente a los partidos (Álvarez Junco, 1995; Castells 1983: 225, 236).

Durante los 70, el movimiento obrero se expandió en España como refleja el incremento del número de huelgas: 250,000 días en 1964-69, 850,000 en 1970-72, 1.550.000 entre 1973 y 1975 (Maravall, 1985). Como Cortavirta (2000) señala, la firma en 1978 de los llamados Pactos de la Moncloa (un acuerdo social que incluía el control de los salarios basándose en el índice de precios, y la reforma de los mercados laborales e industrial) por parte de los sindicatos más grandes (UGT y CCOO) y los partidos políticos estableció una clara línea divisoria entre aquellas organizaciones que favorecerían continuas reformas a través de negociaciones con el gobierno y aquellas organizaciones más pequeñas que se opusieron a estos acuerdos y a otras reformas posteriores que implementaría el PSOE a partir de 1982, cuando llegó al poder. Desde entonces, podemos hablar de un (mayoritario) sector a favor de alcanzar compromisos bajo el nuevo marco de regulación laboral establecido por la Unión Europea a partir de los Acuerdos de Maastricht, y de otro sector opuesto a las políticas de precarización de los entornos laborales. Este último espacio, representado por organizaciones como la CGT, colaboraría con el sector más radical de los movimientos sociales que emergieron durante la transición y que se consolidarían en los 90. Ambos sectores serían dos de los pilares en los que emergería el MJG en España.

Junto a este conjunto de genuinos movimientos “anti-franquistas”, en las últimas fases de la transición, la oposición democrática favoreció, y también fue impulsada por, la actividad de una nueva serie de (nuevos) movimientos sociales que, en diverso grado y forma, sobrevivieron a las tendencias de desmovilización que acontecieron en el proceso de cambio político (Álvarez Junco 1995). Algunos de ellos, particularmente el feminista y el ecologista, se tornaron más visibles en las fases en las que aconteció el declinar del ciclo de proceso ligado a la transición⁵. Básicamente, los movimientos sociales españoles entraron en escena marcados por su tardía emergencia en un contexto político de oposición al régimen dictatorial y la transición subsiguiente. En este sentido, sus raíces están bien diferenciadas por, al menos, tres características, que lo distinguen de los nuevos movimientos sociales

⁵ 1978 marcaría el comienzo de este periodo, si atendemos al número de huelgas convocadas (Maravall, 1985).

que surgirían en Europa en los años 60 y 70. En primer lugar, los lazos entre los distintos movimientos sociales son débiles y no experimentaron una ola contracultural compartida como ocurrió en otros países (Álvarez, 1995; Rucht 1988). La ausencia de fenómenos de militancia múltiple entre los diferentes movimientos, así como la escasez de experiencias de colaboración redujo considerablemente los patrones de mutua identificación y solidaridad entre los distintos movimientos sociales. En segundo lugar, la violencia no figura en el repertorio de protesta de estos movimientos, una característica que se configuraría durante la transición política. Por último, las raíces libertarias de algunos de estas redes (particularmente presentes en determinados grupos ecologistas) y los nacionalismos locales favorecieron modelos de organización descentralizados y locales, haciendo aún más difícil la coordinación estable a escala estatal.

Siendo estas características compartidas por la mayor parte de los movimientos sociales emergentes, existe también diferencias significantes entre los mismos. De acuerdo a la literatura existente sobre los movimientos sociales, podemos considerar que existen tres factores que pueden ayudarnos a explicar la naturaleza de sus estructuras organizativas y de sus identidades colectivas: el origen territorial, la clase de lazos con respecto a organizaciones políticas y sociales pre-existentes y el tipo de liderazgo⁶. En relación con el último de los factores, el tipo de liderazgo, existe un marcado *personalismo* como característica cultural de estos movimientos sociales. Éste decrecerá durante la renovación generacional activista de la última década. Los otros dos factores nos permitirán establecer las diferencias y particularidades de los nuevos movimientos sociales, y lo que es más importante, nos permitirán establecer los diferentes patrones de desarrollo de dichos movimientos. Para ilustrar esta afirmación compararemos la evolución de los movimientos ecologista y feminista, presentando algunas referencias relativas a otros movimientos (Jiménez 2005).

El proceso de democratización abrió las puertas a la constitución de una gran variedad (en términos ideológicos, modelos organizacionales) de los colectivos feministas y ecologistas. Esta situación no impidió que se configurase de forma incipiente identidades colectivas compartidas (declaraciones públicas en torno a la afiliación y al status) como muestra la proliferación de las etiquetas de “ecologistas” y “feministas” entre las nuevas organizaciones así como la propia auto-definición como “movimientos” (a pesar del sentido negativo que tenía este término al haber sido extensamente utilizado por organizaciones franquistas).

⁶ Véanse Rucht (1998), Minkoff (1994), Diani (1995), McCarthy and Wolfson (1996).

El movimiento ecologista (en sus vertientes conservacionistas y antinuclear) tomó forma sobre una constelación de organizaciones locales. Partidos políticos y otras organizaciones supralocales no tuvieron un destacado papel en su conformación. En su lugar, la reacción ciudadana frente a problemas medioambientales locales constituyó la razón fundamental que dio pie a su generación. Estas condiciones en las que emergieron estos movimientos redujo la importancia de la afiliación partidista de los activistas en el seno de los modelos organizacionales. De hecho, la única rama política que puede ser identificada como tal en las primeras campañas ecologistas se asienta sobre raíces libertarias. Tanto las tendencias libertarias como las de carácter conservador alimentaron una identidad ecologista que enfatizaría la autonomía (local) de las diferentes organizaciones y que rechazaría ser enmarcada o situada bajo partidos políticos.

Por el contrario, las raíces organizativas de una parte importante del movimiento feminista no estuvieron ligadas a temas concretos o a conflictos locales. La mayoría respondió a iniciativas de grupos particulares de mujeres activistas, y el alcance de sus demandas y de sus actividades se definió en términos estatales (Escario et al., 1996: 206-207). La “doble militancia” fue una característica organizacional particularmente importante en aquellos grupos identificados con el “feminismo de la igualdad”. De manera opuesta, la rama identificada con el “feminismo de la diferencia” rechazaba cualquier tipo de colaboración con los partidos.

Las primeras experiencias de coordinación a nivel estatal para estos nuevos movimientos sociales tuvieron lugar como consecuencia de una apertura del sistema político y, concretamente, de las perspectivas de influir generadas por los debates y las audiencias públicas que acompañaron a la redacción de la Constitución española. No obstante, en unos pocos años, según las expectativas políticas de lograr una influencia real fueron declinando, los desencuentros entre diferentes sectores crecieron, y la coordinación se tornó problemática. Sin embargo, las consecuencias de este proceso variaron para los diferentes movimientos sociales dependiendo de los perfiles y orígenes organizacionales. Para los ecologistas, las mayores discrepancias tuvieron lugar en torno al modelo de organización territorial (cómo coordinarse a escala nacional), pero no afectaron a su identidad colectiva (identificación mutua, solidaridad y acción común potencial). Para los sectores feministas, sin embargo, el centro del debate giró alrededor del tema de la “doble militancia” (la naturaleza de la identidad colectiva). Mientras que en el caso del movimiento ecologista las condiciones políticas (negativas) no afectaron al corazón de su identidad colectiva (aunque ésta se desarrolló bajo patrones de débil coordinación territorial), en el caso del feminismo, significó la división entre aquellos grupos ligados a partidos políticos y aquellos (más minoritarios) que se opusieron a la doble militancia.

En todos los casos, estos nuevos movimientos sociales tuvieron que enfrentarse al dilema de cómo interactuar con las autoridades políticas. La flexibilidad institucional durante la transición política, particularmente bajo el primer gobierno (de centro-derecha), permitió el acceso político de algunas de las demandas promovidas por los nuevos movimientos sociales. Sin embargo, estas primeras experiencias de interacción política con las autoridades bajo la democracia reflejaron también la naturaleza distintiva que, en los siguientes años, caracterizaría la interacción de cada uno de los tipos de movimientos con las autoridades. En este sentido, cabe distinguir entre la participación política de las organizaciones feministas orientadas a la provisión de servicios sociales con la actitud de los grupos ecologistas que mantuvieron un alto perfil político marcadamente conflictivo⁷. Estas diferencias pueden explicarse por los diferentes perfiles organizacionales y en términos de identidad, así como por la diferente naturaleza de sus demandas (marcadas por su diverso encaje en los discursos dominantes y en las agendas políticas durante los primeros años de la democracia). Desde esta perspectiva, las reclamaciones ambientalistas chocaron contra el discurso de modernización económica y la orientación (neo)liberal de las directrices económicas del gobierno. Por el contrario, muchas de las demandas feministas encontraron acomodo en el amplio espectro de derechos democráticos más fácilmente asumidos por las nuevas elites políticas. Los debates sobre estas demandas llegaron a la arena parlamentaria de la mano de partidos políticos de izquierda (que como se mencionó, contaban con muchas simpatizantes feministas). Las peticiones por una igualdad de derechos para las mujeres no consiguieron fácilmente traducirse en reformas legales, pero algunas de las partes de las mismas fueron consideradas planteamientos consustanciales al propio proceso de democratización institucional. Además, la necesidad de obtener una legitimidad doméstica e internacional favoreció la adopción de medidas promovidas por los movimientos sociales como la amnistía y el reconocimiento de la objeción militar.

En suma, la transición a la democracia constituyó un terreno de aprendizaje para los nuevos movimientos sociales. La existencia limitada de oportunidades políticas (mayor flexibilidad, la apertura de una nueva clase política y los medios de masas) ayudaron a la emergencia de los movimientos sociales, así como a la exploración de formas de coordinación estatales con el objetivo de ganar influencia o de condicionar la agenda política durante la fase inicial de la democracia.

El PSOE en el poder: del “reformismo radical” al “cierre estructural

⁷ Esto es especialmente verdad en el caso del movimiento antinuclear. Las políticas energéticas vinieron marcadas por su continuidad con el pasado, manteniendo su orientación pro-nuclear. Durante la transición, las centrales nucleares fueron muy contestadas por los españoles, que se coordinaron a través de un comité de coordinación de escala estatal (*Coordinadora Estatal Antinuclear* 1978), enfrentándose a una fuerte represión policial.

El periodo de acceso institucional para los movimientos sociales durante la transición política fue, con todo, breve. La reconstitución del gabinete ministerial en 1979 diluyó el estilo abierto del primer gobierno. Sin embargo, la influencia política de los movimientos sociales y la visibilidad social se mantuvieron parcialmente por la redefinición que los socialistas hicieron de su estrategia electoral con el objetivo de vencer en las elecciones estatales de 1982. Para oponerse al partido conservador en poder desde 1979 y lograr mayor apoyo popular, el PSOE definió una “estrategia de movilización” con objeto de “asumir el liderazgo de la ciudadanía” de cara a lograr un cambio y un progreso (Maravall 1985: 191).

Como consecuencia de esto, el PSOE elaboró un programa de “reformismo radical” que abría la puerta a determinadas demandas de los movimientos sociales: ley de aborto, medidas sobre la violencia contra la mujer y protección maternal en el caso del feminismo; ley general sobre el medioambiente y creación de un organismo presidencial para aproximarse a los movimientos ecologistas; objeción militar y consulta acerca de la entrada en la OTAN en el caso del movimiento pacifista; ley de cooperación internacional en el caso del movimiento de solidaridad internacional, etc. Aparte de entrar parcialmente en el programa político del PSOE, algunos movimientos sociales ganaron visibilidad en tanto que los socialistas les defendieron en el Parlamento (prohibición de la captura de ballenas, freno al vertido de residuos nucleares en el mar del Atlántico-Norte).

Los movimientos sociales también se beneficiaron de este apoyo temporal del partido socialista. Manifestaciones relevantes contra la OTAN (como la muy concurrida de noviembre de 1981) y la articulación de grupos pacifistas (MPDL, APD, Mujeres por la Paz) contribuyeron a la creación de una sociedad civil activa sobre la base de campañas por la paz. Previamente, el movimiento por la paz se apoyó significativamente en organizaciones ecologistas (Fuente, 1984; Gómariz 1984; 1987; Prevost, 1993). Eran aún muy precarias las redes sociales específicas que se implicaban en temas de paz. Ecologistas y anti-militaristas, así como sectores cristianos de base, el partido comunista y grupos de extrema izquierda, que habían obtenido bastantes malos resultados en las primeras elecciones generales, se agruparon para constituir la red local de comités frente a la OTAN (*comités anti-OTAN*).

En 1982, el PSOE llegó al poder. Después de un corto periodo, la apertura programática se transformó en un cierre del gobierno (un hecho bastante ilustrativo del cambio de estrategia con respecto a los movimientos sociales es el apoyo que dio a la entrada en la OTAN). Las dinámicas previas sobre el consenso desaparecieron rápidamente. La interacción fluida con los movimientos sociales se cortó de raíz. Y la naturaleza cerrada del sistema político se tornó estructural. Después de la

transición, el estado creció notablemente, incrementándose las áreas de intervención pública pero también adoptando un estilo político impositivo (Subirats 1998: 18).

Los movimientos sociales en los años 80

En 1983 el Instituto de la Mujer fue creado como un organismo público de carácter autónomo bajo el paraguas del Ministerio de Asuntos Sociales. Originariamente, fue liderado por una feminista socialista. Este hecho dio lugar a la institucionalización de la política feminista, configurando el llamado “feminismo de Estado” (Valiente 1984).

El fenómeno de la institucionalización de las políticas de género implicó también la institucionalización del movimiento feminista: se produjo una cooptación a través de mecanismos de financiación y del enrolamiento institucional de determinados activistas, y estas organizaciones se convirtieron en proveedores de servicios sociales. Más allá de algunos beneficios en el corto plazo⁸, la influencia política de estos movimientos declinó en el medio plazo. Incluso los canales institucionales de participación resultaron ser nada útiles en la promoción de políticas de la mujer como prueba el perfil del Consejo Asesor de la Mujer (ligado al Instituto de la Mujer) o la escasa participación y seguimiento de las políticas emprendidas para la igualdad de género (los *planes de igualdad*). Además, este proceso acentuó la división interna entre sectores más cercanos a las instituciones (y a los partidos) y el sector minoritario del feminismo radical, bastante conectado con el feminismo de la diferencia.

De forma similar, la evolución del movimiento de solidaridad internacional (la mayor parte eran ONGs para el Desarrollo) estuvieron ligadas al proceso de institucionalización del nuevo área para la ayuda al desarrollo (Secretaría de Estado para la Cooperación y el Desarrollo), ya que España se convirtió en un donante internacional. Mientras que en el caso de otros movimientos sociales inicialmente los intentos de establecer coordinaciones se correspondieron con una iniciativa de las propias redes sociales, la creación de la Coordinadora de ONGDs fue promovida por la administración con el objetivo de formalizar los contactos entre este sector y el gobierno. No podemos explicar el crecimiento del sector de las ONGD (en número de organizaciones, como apoyo social) durante los años 80 y 90 sin tener en cuenta la financiación de las mismas por parte del Estado español (de 20 millones en 1983 a 800 en 1992 y hasta 2.000 millones de pesetas desde que la cuota de apoyo al voluntariado social fue establecida en el principal impuesto sobre renta económica).

Contrastando con esta situación, la dinámica de interacciones entre el estado y los movimientos ecologistas y pacifistas estuvo bastante alejada de la institucionalización y de un eventual escenario de

⁸ Las feministas influyeron en la elaboración de la ley de aborto (Barreiro 2000: 95-6).

cooptación. Después de la transición, aunque el número de activistas que entró a trabajar en redes públicas fue el mismo o superior que el de militantes feministas, no se produjo el fenómeno del “ecologismo de Estado”. La administración no puso en marcha ningún organismo público similar al Instituto de la Mujer. Tampoco desarrolló un programa de financiación de estas organizaciones con objeto de orientar a las organizaciones ecologistas hacia la satisfacción de servicios sociales⁹. Por el contrario, las políticas ambientales estuvieron ausentes de la agenda política hasta mediados de los 90. Consecuentemente, el movimiento ecologista no experimentó una fuerte presión hacia la institucionalización y mantuvo un alto perfil político y su condición política de “outsider”.

Así, a diferencia del ámbito de las ONGD que tenderá a la institucionalización “desde arriba” como plataformas de presión, el perfil del ecologismo jugará un papel relevante en el despegue de los nuevos movimientos globales, enlazando con ellos en la radicalidad de los repertorios de protesta y en el discurso a favor de una democracia “desde abajo”.

2. Movimientos sociales de izquierda en los 90: consolidación organizacional y confluencias hacia el movimiento de justicia global

Los años 90 supusieron la consolidación de un nuevo conjunto de movimientos sociales. Este proceso estuvo influido en gran medida por las características derivadas del modelo de transición política. En este sentido, pueden observarse dos tendencias significativas. Por un lado, algunos movimientos sociales orientaron sus actividades hacia el campo de los servicios sociales: el sector mayoritario del movimiento obrero (sector de “co-gestión”), el movimiento vecinal, el movimiento de ayuda al desarrollo, el movimiento feminista, y más tarde, el movimiento de apoyo a los inmigrantes. Obviamente, existen diferencias entre ellos, pero en general se caracterizaron por un alto grado de profesionalización, una débil identidad colectiva (no muy cohesiva) y por un perfil bajo en términos de protesta.

Por otro lado, existía otro conjunto de movimientos sociales que no habían tendido hacia dicha institucionalización (o que este proceso no había sido consistente y estable a lo largo del tiempo) y cuya interacción con las autoridades se había basado en el conflicto: ecologistas, antimilitaristas y pacifistas y el movimiento por la “ocupación”. Para los dos primeros movimientos sociales, las

⁹ Una comparación del apoyo financiero que dio la administración a los actores sociales: 3 millones de pesetas a las organizaciones ecologistas, muy lejos de los 20 millones recibidos por las ONGs de Desarrollo y los 70 millones que percibieron asociaciones de mujeres.

organizaciones presentaron un perfil escasamente formalizado, descentralizado con diferentes niveles de inter-territorial coordinación/integración y repertorios de protesta dirigidos principalmente hacia la movilización social (aunque, como se comentó, dentro de parámetros moderados como cultura de protesta). Para el movimiento *okupa*, el carácter disruptivo de sus prácticas condujo a mantener unas relaciones antagónicas con las autoridades, siendo el alcance de su acción y de su reproducción eminentemente locales, consecuencia de sus prácticas y de la escasez de experiencias de coordinación. En las siguientes páginas, examinaremos todos estos movimientos, aunque particularmente prestaremos atención a aquellos casos que tuvieron una notable influencia en el Movimiento por la Justicia Global (MJG).

El **movimiento de solidaridad internacional** (principalmente el sector de las ONGD, Organizaciones no Gubernamentales de Desarrollo), como se comentó anteriormente, experimentó un importante crecimiento organizacional, gracias al apoyo del estado (y también de parte de la sociedad). Durante el primer mandato socialista, se crea una nueva área de cooperación (organizada alrededor de la Agencia Española para la Cooperación Internacional) que contribuyó a que las ONGDs adquirieran un rol importante en el desarrollo de proyectos en los países empobrecidos y de sensibilización en los países más industrializados a través del dinero público. En el periodo que va de 1985 a 1989 se constituyeron más ONGD que en las décadas anteriores. Junto con el sector social centrado en temas de exclusión (no analizado aquí), las ONGD conformaron un sector con la estructura organizacional más profesionalizada: caracterización por dinámicas de competencia entre organizaciones, débil identificación mutua, orientación centrada en la gestión empresarial, etc.

El *boom* de las ONGDs durante los años 80 y 90 corrió en paralelo al crecimiento espectacular del voluntariado entre la juventud española, del cual surgiría una nueva generación de activistas sociales. Inicialmente, el movimiento de las ONGD se centralizó sobre todo en Barcelona y Madrid. La Coordinadora de ONG para el desarrollo de España canalizó las relaciones de este espacio social con las autoridades. El acceso a procesos de decisión tuvo lugar a través del Consejo Asesor para la cooperación al desarrollo (1989). Esto condujo a que los sectores más politizados (generalmente representados a través de pequeñas organizaciones) tuvieran un peso similar que las más profesionales (y más moderadas) ONGD del sector, lo que contribuiría de alguna manera a suavizar las presiones institucionales.

Actuando así mismo como un contrapeso a las presiones institucionales, en 1993 emergería un movimiento de base, la Plataforma 0,7%, la cual demandaba, entre otros objetivos, la implementación del compromiso adquirido con Naciones Unidas para destinar el 0,7% del PNB a ayuda al desarrollo. 1994 representó un momento álgido de movilizaciones para esta plataforma en el cual la crisis

humanitaria de África constituyó un soporte mediático para la protestas, a lo que se ha de añadir la celebración de una cumbre alternativa (dentro de la campaña internacional 50 Años Bastan) con motivo de la reunión del Banco Mundial en Madrid. La Plataforma 0,7% se articuló a través de una red difusa de acampadas locales que permanecieron durante semanas en las calles de diversas ciudades. En el plano estatal, mantuvo una débil estructura de coordinación. Al margen de un repertorio de protesta más radical que el de las institucionalizadas ONGDs (haciendo uso, por ejemplo, de acciones de desobediencia civil no violenta), la Plataforma 0,7% contribuyó a que el sector de la solidaridad internacional fuese más allá de la crítica a la ayuda oficial para alcanzar a instituciones como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, y más tarde, la globalización neoliberal.

Más recientemente, durante el periodo en el que gobernó el partido conservador del Partido Popular (1996-2004), la estrategia de las autoridades intentando diluir el poder de la Coordinadora De ONGD condujo a que las propias organizaciones reaccionaran con respuestas críticas frente al gobierno, particularmente de los sectores más orientados hacia la izquierda política. Esta tendencia hacia una ideologización más explícita en parte se vería impulsada por la llegada de una nueva generación de activistas insatisfechos con la orientación exclusiva hacia la implementación de proyectos de cooperación y la aceptación de la actual política de cooperación. Así mismo, se manifestó una tendencia hacia la descentralización como consecuencia de la descentralización de las políticas de ayuda al desarrollo en el marco del Estado de las autonomías.

Ambas ramas del movimiento por la solidaridad internacional (ONGDs y Plataforma 0,7%) desarrollarán un papel importantes en la promoción de diferentes sectores dentro del Movimiento por la Justicia Global. Por un lado, determinadas ONGDs abrieron el discurso hacia las críticas de la ayuda condicionada a favor de las exportaciones españolas (armas incluidas), las políticas neoliberales implementadas por el FMI y el Banco Mundial y el llamado libre comercio. También apoyaron campañas internacionales contra las minas anti-persona, en la que participarían organizaciones como Greenpeace, Amnistía Internacional o Médicos sin Fronteras. Por otro lado, la Plataforma 0,7% sentaría las bases para el desarrollo de RCADE (Red Ciudadana por la Abolición de la Deuda Externa), una red muy activa en las protestas “anti-globalización”, caracterizada por un discurso de democracia radical y de desobediencia civil, patrones presentes en la cultura de protesta de los nuevos movimientos globales.

De la misma manera, el **movimiento feminista** resultó el movimiento más institucionalizado entre los nuevos movimientos sociales. Y ello no solamente debido a la consolidación del “feminismo de estado” pero también, y a diferencia del sector de ONGD, sino también por su interacción con las

autoridades a través de un organismo con un perfil político muy bajo (el Instituto de la Mujer), y la debilidad de las coordinaciones para mantener una interlocución única con las autoridades, ya que la Coordinadora de Organizaciones de Mujeres mantuvo un perfil muy bajo fruto de las divisiones internas en el movimiento durante los años 80 y 90.

A partir de 1982 (y mientras los socialistas se mantuvieron en el poder) tuvo lugar una gran dispersión de grupos y organizaciones de mujeres. En 1987, el Instituto de la Mujer publicó un catálogo de 600 organizaciones, y sólo el 10% de las mismas llegaba a definirse como “feministas”. El Instituto de la Mujer albergó en su interior una multiplicidad de tendencias dentro del feminismo (radical, de la diferencia, lesbianismo) y sus actividades se caracterizaron por orientarse hacia objetivos a corto plazo: por una educación no sexista, por la extensión de los derechos de aborto, por el fin de la violencia contra las mujeres (Folguera 1988).

Sin embargo, en la década de los 90 se puede hablar de un proceso de extensión de la identidad colectiva del movimiento, más allá de los grupos que se autodefinían como feministas, sobre la base de la creación de espacios de confluencias entre feministas provenientes de otros movimientos o redes sociales (lesbianismo, antimilitarismo, ecologismo). Quizás la más remarcable tendencia en España (y puede que en otros contextos) es la configuración de una amplia red de mujeres, con una gran variedad de discursos y prácticas, en las cuales las perspectivas feministas convivieron manteniendo su independencia con los partidos políticos (Cruells 2001). Desde esta perspectiva, y distanciándose del legado del pasado, el movimiento feminista habría sido capaz de desarrollar una identidad colectiva más allá de afiliaciones políticas e ideológicas. Como indicador de este proceso, es posible encontrar la existencia de discursos feministas permeando las protestas “alterglobalización”, y una participación de colectivos de matriz feminista a través de grupos como Mujeres contra la Guerra, Mujeres de Negro (ligado al movimiento anti-militarista), etc.

El incremento de la dinámica de conflicto con respecto a las autoridades sería también una nueva característica de las organizaciones de mujeres que tradicionalmente habrían orientado sus actividades hacia la provisión de servicios sociales. Un ejemplo de esta tendencia puede encontrarse en la constitución de 2002 de la Red de Organizaciones Feministas contra la Violencia de Género, red originada en una campaña que se desarrolló en los 90. De manera similar, la Coordinadora de Organizaciones Feministas obtuvo una mayor visibilidad pública durante los últimos años. El perfil político más alto de muchas de estas organizaciones se vio favorecido por el contexto político, ya que la llegada de los conservadores al poder favoreció las protestas contra las políticas del gobierno por parte de grupos de izquierda, y en concreto facilitarían la promoción por parte del PSOE de una Ley contra la violencia de género en el 2005.

Como principal rasgo organizativo de la cara más pública del movimiento **de inmigrantes y anti-racista** destacamos el alto grado de institucionalización. Este espacio creció en los 90 en paralelo al fenómeno de la inmigración sobre la base de las redes de ONGs implicadas en actividades de solidaridad social. Estas organizaciones centraron sus acciones en temas de sensibilización ciudadana y de asistencia social a inmigrantes. Su interacción con las autoridades se canalizó principalmente a través del Foro para la Integración Social de los Inmigrantes, desarrollada en 1995. Las asociaciones de inmigrantes, los principales sindicatos y las ONGs de asistencia o de derechos humanos se limitaron a una “gestión” de los programas públicos para la asistencia de inmigrantes (Veredas, 2003)¹⁰.

No obstante, las diferentes movilizaciones a favor de los derechos de inmigrantes (desde 2000) han sido principalmente el resultado de la auto-organización de diferentes grupos de inmigrantes que carecían de documentos (los “sin papeles”) en área de gran concentración de población inmigrante (Barcelona, Murcia, Huelva, Sevilla). Estas movilizaciones significaron una reacción social contra las políticas conservadoras en torno a la regulación de los derechos de la población inmigrante. Contaron con el apoyo activo de organizaciones sindicales alternativas (como la CGT), redes locales participantes de las protestas “altermundialización”, estudiantes y asociaciones de vecinos¹¹. Estas movilizaciones fueron así mismo un reflejo de las protestas de los “sans papier” en Francia durante los 90. Incluyeron encierros en iglesias y universidades, huelgas de hambre y manifestaciones¹².

Tras la institucionalización del **movimiento vecinal** durante la transición, el panorama de estas organizaciones se caracterizó por la fragmentación y la heterogeneidad (hasta tal punto que es dudoso incluso denominarlo “movimiento”). Sus activistas quedaron atrapados en dinámicas de servicios públicos locales con un gran sesgo partidista, generalmente en torno al PSOE y a Izquierda Unida. Esta orientación impidió el establecimiento de lazos con los potenciales participantes: los propios vecinos. La falta de una identidad colectiva común (y la presencia de desencuentros derivados de las diferencias ideológicas) nos permiten explicar la debilidad de las infraestructuras organizacionales¹³.

Sin embargo, los grupos vecinales fueron responsables de la mayor parte de los fenómenos de protesta en España (Adell 1999). Generalmente estas manifestaciones tuvieron un carácter reactivo, demandando una mejora de servicios sociales o de infraestructura, oponiéndose a proyectos que

¹⁰ Sin embargo, cuando los socialistas retornaron al poder, representantes de estas organizaciones tomaron activamente parte de la elaboración de la ley sobre inmigración (2005).

¹¹ Las diferentes reformas llevadas a cabo por los conservadores fueron criticadas por amplios sectores sociales como el de las ONG relacionadas con la provisión de servicios sociales a inmigrantes. Sin embargo, sus protestas no alcanzaron visibilidad.

¹² En los últimos tiempos emergieron organizaciones de derechos humanos en apoyo de las movilizaciones de inmigrantes (Asociación pro-derechos humanos de Andalucía), y otras que específicamente fueron la confluencia de activistas o grupos “altermundialización” (caso de Derechos para Todos).

¹³ En 1991 se creó la Coordinadora de Asociaciones de Vecinos del Estado español. Desaparecería una década después incapaz de construir una coordinación inter-territorial de grupos locales.

consideraban que afectaban a sus intereses, dinámicas del tipo NIMBY (Not In My Back Yard). Consecuentemente, no tuvieron un carácter “progresista”. Las protestas se organizaron alrededor de plataformas puntuales en las cuales se producían confluencias con otros movimientos. Entre ellos destacan las experiencias de colaboración con grupos ecologistas (defensa de espacios naturales, oposición a infraestructuras, protección de lugares históricos). En algunos casos, esto condujo a una dinámica de intensificación de protestas y a la configuración de una agenda social más amplia de demandas (educación, inmigración y sobre todo vivienda)¹⁴. Este perfil de cooperación entre aliados locales y movimientos sociales produjo nuevas experiencias de participación ciudadana en la política institucional local como ilustraron las plataformas creadas en torno a los Planes de Desarrollo Comunitario y otras iniciativas (Rodríguez 2002, Rebollo 2001).

Como ya fue resaltado anteriormente, la naturaleza “pactista” del proceso de transición democrática originó la división en el **movimiento obrero**, entre un sector institucionalizado alrededor de los dos sindicatos más grandes (UGT y Comisiones Obreras) y un sector crítico, que podemos denominar “alternativo”. Este sector crecería en términos organizacionales como consecuencia de las divisiones internas que llevó a la creación de nuevas organizaciones (CGT, Central General de Trabajadores surgida de la CNT a finales de los 80, Co.Bas o Sindicato Ferroviario de CC.OO en el 2000) o la articulación de nuevas plataformas locales (Intersindical Alternativa de Catalunya). CGT es actualmente el tercer gran sindicato con cerca de 50.000 activistas. Este sector “alternativo” constituiría uno de los pilares de las protestas “altermundialistas” en la década de los 90 y las cumbres alternativas tras Seattle como la celebrada en Praga (2000).

El divorcio entre el sector “orientado a la gestión” y el “alternativo” se evidencia, por ejemplo, en la diferente aproximación a temáticas europeas y globales, en términos de acción y discurso. Las Euromarchas (1997-2000) encontraron adherentes y promotores en el sindicalismo alternativo, en este caso fundamentalmente en la CGT. Los días de acción que se promovieron en el 2000 desde la Acción Global de los Pueblos (AGP) en torno a la cumbre de Praga del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional supuso la confluencia “formal” entre estos sindicatos alternativos y las redes sociales insertas en protestas “altermundialistas”. Por el contrario, desde CC.OO y UGT (con la excepción de grupos minoritarios) se decidió dar apoyo a grandes eventos como el Foro Social Mundial. En la cumbre alternativa frente a la reunión de la UE en Barcelona (marzo 2002) se puso de manifiesto estas distancias. El sindicalismo alternativo tomó parte de la “Plataforma contra la Europa del Capital y la

¹⁴ En Marzo de 2003, 100 plataformas de la ciudad de Valencia (gobernada por el Partido Popular) se concentraron para manifestarse contra las políticas urbanas y en demanda de una mayor participación (Diagonal 2004, n. 0, November-December: 8).

Eliminado: concentraron

Guerra”, que se oponía radicalmente al proyecto de Constitución Europea, mientras que el sindicalismo alternativo organizó de forma autónoma sus manifestaciones. En el 2001, se celebró el Primer Encuentro de trabajadores contra la Globalización Capitalista, donde el sindicalismo alternativo confirmó su apoyo a los movimientos “altermundialistas”.

Así mismo, durante los 90 se produjeron movilizaciones de trabajadores afectados por el cierre de empresas en los cuales los grandes sindicatos tuvieron un rol muy limitado, incrementándose la referencia negativa en el mundo laboral hacia las consecuencias de la globalización económica, y adoptándose formas de acción de carácter más disruptivo¹⁵. Con todo, estas esporádicas convulsiones de protestas que situaron el contexto global en el diagnóstico de sus problemas (i.e., la deslocalización de empresas) no fueron suficientes para crear puentes entre los distintos sectores de los movimientos sociales y “altermundialistas” y los grandes sindicatos. En todo caso, sería escenarios puntuales como la oposición al Plan Hidrológico Nacional, la reforma de las leyes sobre inmigración o la oposición a la guerra de Irak los escasos momentos de confluencia entre el sindicalismo “de gestión” y las redes críticas frente a la mundialización.

En los años 90, el panorama del **movimiento ecologista** en España revela la coexistencia de diferentes tipos de organizaciones, cada una enmarcada en un perfil de organización de sus participantes o de sus movimientos de base. Desde una modesta situación de partida allá por los años 80, se ha producido un notable crecimiento tanto de organizaciones profesionales como de procesos de participación social. En términos de grupos, el número de los mismos creció sobre todo a partir de la segunda mitad de los 80, aunque el acceso a recursos ha sido modesto. *Greenpeace* es la organización profesional que más destaca en este sentido, estando el resto de recursos distribuido en un conjunto disperso de grupos locales y regionales¹⁶.

Simultáneamente, el movimiento ecologista ha ampliado su agenda temática. En primer lugar, hacia temas de índole de calidad medioambiental, movidos por el impulso de espacios conservacionistas y antinucleares, que previamente habían recibido poca atención. Y en segundo lugar, hacia temas de carácter global (desde transgénicos al calentamiento del planeta, pasando por la crítica a instituciones internacionales como el FMI por su impacto medioambiental). El escaso número de

¹⁵ Éste sería el caso del Campo de la Esperanza, una iniciativa de los trabajadores despedidos de la empresa SINTEL (ligada a Telefónica) que levantaron una acampada durante 187 días en el 2001. También el cierre de una factoría de galletas en Palencia en ese año provocó importantes protestas, llegando los trabajadores a retener durante 13 horas a los directivos de la compañía que había sido adquirida por la multinacional United Biscuit.

¹⁶ Greenpeace ha capitalizado el mayor incremento de cuotas de afiliación en el mundo ecologista: de 16.000 (1984) a 72.000 (1997). Este proceso ha llevado a la rama española a asumir una mayor responsabilidad organizativa en Greenpeace-Europe, impulsando de paso la integración de esta organización en el movimiento ecologista del Estado español.

organizaciones de ámbito estatal ha obstaculizado, sin embargo, el desarrollo de un proceso de alta especialización. En todo caso, las dinámicas de división de tareas han respondido a acuerdos puntuales sobre coordinación entre organizaciones y mantenimiento de un respeto mutuo de acuerdo a la disponibilidad de recursos esporádicos. Así mismo, la expansión organizacional del movimiento ecologista ha llegado en términos de temas y movilizaciones al plano local.

Se puede también identificar una tendencia hacia la moderación política del repertorio de acción, y también hacia un incremento o mayor relevancia de la utilización de escenarios mediáticos para desarrollar una presión política. En cierto modo, ha emergido un contexto que presionaba hacia la institucionalización de este movimiento social. Sin embargo, la respuesta por parte de las organizaciones de una parte del movimiento ha sido incrementar esa capacidad de interacción política sin perder su capacidad de protesta y de crear espacios de participación social. El incremento de la relevancia política se ha visto acompañado de una mayor eficiencia en el uso de recursos y una limitación consciente del proceso de profesionalización. En este sentido, han cobrado fuerza dinámicas de cohesión interna entre colectivos y redes sociales ecologistas a través de estructuras estatales de coordinación (como es el caso de Ecologistas en Acción), de colaboración entre organizaciones (Ecologistas en Acción, Greenpeace, WWF-ADENA, SEO/Birdlife) y entre grupos medioambientales y otros movimientos sociales.

Gracias a estas transformaciones organizacionales durante los 90, el movimiento ecologista incrementaba su capacidad de influir en procesos de decisiones que tenían lugar bajo escenarios de conflicto medioambiental. Su oposición a las políticas de manejo del agua y de residuos industriales nos sirve para ilustrar esta capacidad (Jiménez 2005)¹⁷. No obstante, la dinámica de interacción entre el Estado y el movimiento ecologista permanece anclada en la lógica del conflicto-acceso.

Como consecuencia de la extensión territorial y del aumento de cohesión entre grupos ecologistas, y la notable presencia de discursos ambientalistas en las agendas políticas y sociales, este espacio social ha sido uno de los mayores pilares del Movimiento por la Justicia Global, y particularmente de las protestas “altermundialistas” (Jiménez 2007a). La campaña internacional *50 Years is Enough!* (para protestar por la conmemoración de la fundación del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional) llegó a España de la mano de grupos ecologistas como Aedenat, que ahora forman parte de Ecologistas en Acción. Una cumbre alternativa tuvo lugar durante los actos oficiales celebrados en 1994 en Madrid. Las protestas incluyeron bloqueos simbólicos y contaron con la presencia de un amplio número de organizaciones sociales, desde grupos pacifistas hasta pequeños grupos políticos,

¹⁷ Desde 1990 el movimiento ecologista ha sido el más importante promotor de alianzas y plataformas contra políticas de ámbito estatal como el plan hidrológico o los programas de tratamientos de residuos industriales. Especialmente en el primer caso, el movimiento ecologista ha demostrado una capacidad para presionar a las autoridades que sólo es comparable a las protestas contra las centrales nucleares durante la transición.

pasando por organizaciones de solidaridad internacional. Más tarde, Ecologistas en Acción continuaría participando en procesos relacionados con las protestas “altermundialistas”, a través de campañas (Movimiento Anti-Maastricht, contra el proyecto de Constitución Europea), o promoviendo encuentros entre movimientos sociales (como el celebrado en el 2001 en Girona, y que supuso un hito en la dinámica de creación de vínculos entre grupos “altermundialistas” en el Estado español).

Como ya se introdujo anteriormente, la dinámica del **movimiento antinuclear** y por la **paz** (contra la OTAN) en el Estado español es bastante similar a la de los nuevos movimientos sociales en Europa. Entre sus logros podemos considerar la moratoria nuclear y el impacto socio-cultural de la campaña contra la entrada de España en la OTAN (que abrió las puertas a una cultura anti-guerra en el país). Así mismo, dada su duración y también su éxito, la campaña contra el servicio militar obligatorio se puede considerar como una de las campañas más relevantes durante los 90 del movimiento pacifista europeo.

La campaña de oposición a la entrada de España en la OTAN (1981-1986) supuso un impulso para la coordinación a escala estatal del movimiento pacifista. Sin embargo, la coordinación no se fundó en bases muy sólidas, resultando depender en demasía de la coyuntura política (entrada del PSOE en el poder) y del papel relevante que desarrollaron los partidos políticos (una característica similar a las movilizaciones desarrolladas durante la transición). En el momento en el que el PSOE cambió completamente su posición (de una fuerte oposición a la entrada en la OTAN a un apoyo incondicional a la incorporación en dicha estructura militar), el movimiento pacifista perdió un importante aliado y las oportunidades políticas se cerraron drásticamente. En la medida en que el entorno político se iba volviendo menos favorable las discrepancias internas se tornaron más importantes.

Sin embargo, a lo largo de los 80 las principales líneas de acción que trazaron las bases para la re-emergencia del movimiento pacifista en la siguiente década están ya presentes: la oposición al uso de energía nuclear en los campos civil y militar, la objeción de conciencia al servicio militar obligatorio y al pago de impuestos que puedan contribuir a partidas presupuestarias militares, y la educación en valores pacifistas. Son temas que, no obstante, se fueron desarrollando a través de campañas no conectadas entre sí. Durante la última década, a pesar de que no podemos hablar de la existencia de una infraestructura estatal de coordinación (como en el caso del movimiento ecologista), existen diversas redes (de grupos y de individuos) que comienzan a compartir una identidad colectiva común (como es el caso del movimiento feminista). Esta identidad colectiva se (re)produce a través de una serie de redes que dotan de continuidad (y de coherencia) hacia una agenda más pro-activa de campañas e iniciativas (en contraste con la naturaleza “reactiva” de las mismas de décadas anteriores), al mismo tiempo que se mantiene la autonomía de estas redes sociales con respecto a los partidos políticos.

Dos de los más relevantes sectores dentro del movimiento pacifista serán el “movimiento contra la guerra” y el “anti-militarista”¹⁸.

Movimiento contra la guerra

Después de la campaña contra la OTAN, la oposición a la Guerra del Golfo refleja una de las características más relevantes de las movilizaciones contra intervenciones militares y, en general, del movimiento pacifista en España: en ningún caso condujeron hacia la articulación de plataformas de ámbito estatal (por ejemplo, el Comité Coordinador de Organizaciones Pacifistas que actuó durante la campaña frente a la OTAN no ha sido reeditado). En su lugar, las movilizaciones han sido el resultado de iniciativas singulares, bien locales o promovidas por familias ideológicas (partidos y grupos de extrema izquierda, grupos autónomos y libertarios, movimientos pacifistas como el MOC, etc.)

Estas movilizaciones fueron encontrando un grado de apoyo muy diferente de grandes partidos (caso del PSOE y de IU) y de las grandes centrales sindicales dependiendo de la configuración política del poder institucional. Así, el período de gobiernos conservadores (1986-2004) favoreció (implícitamente) alianzas entre el PSOE e Izquierda Unida y movimientos sociales (un reflejo de lo cual fue el día internacional contra la guerra del 15 de febrero de 2003), provocando la entrada en la agenda electoral de la invasión de Iraq. Por el contrario, a comienzos de los 90, las manifestaciones contra la Guerra del Golfo (cuando el PSOE aún estaba en el poder) tan sólo contó con el apoyo político de Izquierda Unida¹⁹. La configuración política del poder ha influido también en el tamaño y en la extensión de las manifestaciones, ya que las alianzas con actores institucionales han garantizado el acceso a los medios de comunicación y a otros recursos de movilización (Jiménez 2007b).

Las plataformas de protesta frente a la guerra de Iraq confirman, por un lado, la fragmentación de los movimientos anti-guerra en el Estado español, los cuales se desarrollan a escala local y en ocasiones emergen diferentes espacios de acuerdo a los diferentes bloques ideológicos que se conforman. En Barcelona, la plataforma *Aturem la Guerra* (Paremos la Guerra) sirvió de base a diferentes iniciativas. Sin embargo, en Madrid la atomización fue más evidente con la existencia de al menos 5 espacios bien delimitados: espacios de izquierda ligados con presencia de grupos políticos (*Asamblea contra la Globalización Capitalista y la Guerra*, *Foro Social de Madrid*), organizaciones

¹⁸ También es observable un involucramiento mayor de las ONGDs en actividades de concienciación de carácter pacifista (contra el comercio de armas o los gastos militares), a través de un mensaje fuertemente perneado por el discurso de pacifistas y anti-militaristas.

¹⁹ Algunos datos ilustrativos: en 1999 las manifestaciones contra la intervención en Kosovo contó con 18.000 activistas (Madrid); durante la guerra de Afganistán las protestas alcanzaron los 20.000 participantes en Barcelona; la invasión de Iraq dio como resultado que las 6 mayores manifestaciones superaran en su conjunto el millón y medio de manifestantes (de acuerdo a las, probablemente, muy conservadoras estimaciones de la policía). Según encuestas oficiales del CIS (Abril 2003), cerca del 25% de la población había participado en algún acto contra la intervención militar.

autónomas (asambleas locales contra la guerra, incluyendo centros sociales), redes de democracia radical (*Consulta Social Europea*), *Cultura contra la Guerra* (una plataforma de artistas próxima al PSOE) y redes pacifistas (*Espacio Horizontal contra la Guerra*). Por otro lado, la fragmentación no ha impedido el mantenimiento de iniciativas comunes (llamadas a la acción internacionales provenientes del Foro Social Europeo), reflejando nuevas tendencias en espacios de confluencia dentro de los movimientos sociales, una dinámica muy característica del MJG.

El movimiento antimilitarista: las campañas de desobediencia militar

Las campañas de objeción al servicio militar y de “insumisión” (resistencia total a la realización del servicio militar y a desarrollar cualquier servicio civil alternativo) que comenzaron en 1988 constituyeron las protestas más significativas en la historia de los movimientos antimilitaristas (Ajangiz 199, Prat 2003). Lograron abolir el servicio militar obligatorio, realizando una deslegitimación previa del servicio social que las autoridades ofrecían como sustituto de las prestaciones militares. Fundamentalmente su éxito se debió al apoyo recibido por parte de la juventud, hasta tal punto que resultó imposible para las fuerzas armadas españolas satisfacer sus necesidades de alistamiento. El número de personas que realizó una objeción al servicio militar creció de 738.832 entre 1976 y 1998. En 1999 había 20.000 “insumisos”. La opinión pública también contribuyó de manera general a la legitimación de estas campañas antimilitaristas: un 63% de la población en los 80 y un 75% en los 90 expresaba un rechazo al servicio militar obligatorio (Ajangiz 2000). Estas campañas contribuyeron así mismo a sedimentar valores pacifistas en el conjunto de la sociedad española.

El principal colectivo promotor de esta campaña fue la organización del Movimiento de Objeción de Conciencia (MOC), creado en 1977, como consecuencia de que los proyectos para legislar la objeción de conciencia fueron considerados bastante restrictivos²⁰. En 1979, durante el primer congreso, el MOC se definió así mismo como un movimiento anti-militarista basado en estrategias de acción no-violenta, para posteriormente incorporar como su segunda principal referencia la oposición a las sociedades patriarcales. La estrategia del MOC trajo la aparición de nuevas organizaciones, algunas de carácter regional (Asociación de Objeción de Conciencia de Catalunya o Euskadi), y otras ligadas a grupos de extrema izquierda (Mili KK). Estas organizaciones continuaron presionando a las autoridades a través de partidos políticos y de carácter nacionalista que defendieron sus posiciones en los parlamentos.

²⁰ Inicialmente, el MOC se apoyó en infraestructuras organizacionales existentes como es el caso de redes cristianas del tipo de Justicia y Paz, o de redes informales alrededor de los espacios sociales auto-gestionados. Se mantuvo una independencia de los partidos políticos, como en el caso del movimiento ecologista, y se encontró un caldo de cultivo en redes, aparte del cristianismo de base, enraizadas en grupos libertarios, colectivos de extrema izquierda, grupos ecologistas y redes de solidaridad internacional.

En términos organizativos, el movimiento anti-militarista se caracterizó por una radicalización de algunas de las características más reseñables de los nuevos movimientos sociales en este país, como la autonomía y la orientación local de los grupos, y el asamblearismo como método de toma de decisiones. La descentralización de estas redes sociales no impidió al movimiento el mantenimiento de campañas de ámbito estatal, de marcado carácter antagonista mediante la apelación a la insubordinación civil y como respuesta a la posterior represión de las autoridades. Cientos de juicios y de personas encarceladas contribuyeron a mantener la tensión de este movimiento bastante viva (Pérez y Expósito, 2001).

Con todo, la estrategia de sensibilización de la opinión pública por parte del MOC (que pasaría a denominarse Alternativa Antimilitarista en el 2001) se centró principalmente en la difusión de valores de paz a través de la educación, la objeción fiscal a los gastos militares y la promoción del diálogo y otras formas de relación social como medio para prevenir conflictos violentos. Aparte de promover una cultura antimilitarista, el MOC tuvo un impacto considerable en la extensión de repertorios de acción hacia otras redes sociales, como es el caso de las “altermundialistas”, caracterizados por la radicalidad no-violenta, la participación, y el tono imaginativo y lúdico de sus protestas.

Aunque el movimiento vecinal ya había realizado ocupaciones de edificios para llamar la atención de las autoridades acerca del problema de la vivienda, se puede decir que, como parte de los nuevos movimientos sociales, el **movimiento “okupa”** no comenzó su andadura hasta mediados de los 80. De reclamar espacios para vivienda, el movimiento okupa hizo evolucionar sus objetivos y discursos hacia una reclamación de la necesidad de espacios autónomos para la expresión política, de fuerte contenido anti-capitalista (ligado a las ideas de los movimientos de autonomía de Italia), apoyándose también en el ecologismo social y la creación de espacios contraculturales, entre otros proyectos. La ocupación de inmuebles se convirtió en una herramienta de acción muy importante para este movimiento y para otras redes sociales, que se vieron impulsadas con la creación de espacios sociales y que fueron permeadas con los discursos de “reapropiación” (material) y de “autonomía” (expresiva) como elementos centrales de la acción política (Martínez 2004, Herreros 2004, Calle 2004).

El movimiento okupa se extendió en gran medida en ocupaciones realizadas en grandes ciudades a lo largo de los 90, pero también se desarrollaron experiencias rurales, principalmente en Euskadi y Cataluña. En 1996 la visibilidad y el impacto de este movimiento alcanzaron su punto más álgido. Fue entonces cuando el gobierno, entonces en manos del PSOE, decidió promover una Ley que pasaba a considerar la ocupación un delito sancionable con penas de prisión. La posterior represión y la

atracción cultural por la experimentación social hicieron que el movimiento okupa se tornase atractivo para nuevas generaciones de activistas, y también para los medios de comunicación.

Las redes okupas fueron las de mayor descentralización dentro de los nuevos movimientos sociales. Su naturaleza local y sus raíces libertarias y autónomas hicieron que incluso la coordinación entre activistas de la misma ciudad fuera un hecho poco usual y estable. Al mismo tiempo, la ocupación de espacios fue también una herramienta apoyada por otras redes sociales como las del ecologismo político, los antimilitaristas, los anarquistas e incluso grupos vecinales. Todo ello resultó en que el movimiento okupa presentase una identidad colectiva bastante débil, lo que lleva incluso a plantear la disyuntiva de que, al margen de prácticas comunes, podamos hablar de la existencia de un “movimiento social”.

Sin embargo, el impacto de estas redes sociales fue notorio en la gran familia de redes con matrices libertarias en el Estado español, caso del ecologismo, la autonomía política, el antimilitarismo y el feminismo radical. Ayudó a la expansión de repertorios de acción muy antagonistas basados en la desobediencia civil y que se alejaban de la moderación de otras redes. En particular, el MJG, y más específicamente las llamadas protestas “altermundialistas”, nos aparece atravesado por la actividad de estas redes okupas, tanto en lo que se refiere a la utilización de centros sociales autogestionados como a la asimilación de ideas y prácticas marcadas por la horizontalidad y el anti-capitalismo. Por ejemplo, algunos de las plataformas de los MRG (Movimientos de Resistencia Global) creados para atender a los llamados de acción global frente a las reuniones del Banco Mundial y del FMI en Praga (septiembre de 2000) encontraron en centros sociales de Zaragoza, Madrid o Barcelona sus puntos de encuentro.

3. Una nueva cultura de movilización: globalidad, desobediencia y democracia radical

La irrupción del ciclo global a escala planetaria desde finales de los 90 confirmará y conformará el asentamiento de una nueva cultura de movilización marcada por:

- El *carácter global de sus demandas*, en términos internacionalistas y de conjunción e imbricación (física a través de escenarios de protesta y simbólica en discursos y referencias) de diferentes críticas de poder: materialistas y expresivas desde el Norte; campesinas e indígenas desde el Sur.
- El asiento de un *repertorio de contestación radical*, prueba de la emergencia de nuevos fenómenos de movilización que se difunden a escala mundial y utilizan todo el territorio para la recreación de laboratorios de protesta locales.
- Todo ello en el marco de una *meta-narrativa de democracia radical*, presente en el manejo de la horizontalidad como respuesta organizativa y propositiva; la cual es, a su vez, respuesta basada en

la crítica que estos movimientos realizan a las crecientes formas de gobierno global de carácter vertical, opaco y autoritario.

A continuación pasamos a analizar más detenidamente cada una de estas dimensiones que se hacen presentes en los nuevos movimientos globales de este país.

Un ciclo de movilizaciones globales

En 1994, el alzamiento zapatista coincidiría con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá y México al grito de “¡ya basta!”, poniendo en escena un repertorio simbólico rápidamente asimilado como uno de los grandes referentes de los nuevos movimientos globales: “reinventar la democracia”, “los rebeldes se buscan”, entre otros (ver EZLN 1997). Otros eventos importantes de esta década serían: la campaña mundial contra el Acuerdo Multilateral de Inversiones (1997-1998); las Marchas europeas contra la exclusión y el paro (Amsterdam 1997); la convocatoria a un Día de Fiesta Callejera Mundial surgida del colectivo Reclaim the Streets, frente a la cumbre del G-8 en Birmingham (1998), una práctica que inspiraría los Días de Acción Global de la red internacional Acción Global de los Pueblos (AGP)²¹; las diferentes campañas para la cancelación de la deuda externa que lanzarían internacionalmente Jubileo 2000, Jubileo Sur y redes de ONGs como el CADTM; campañas de denuncia o de boicot contra multinacionales como Nestlé, Nike, McDonalds, Monsanto, etc.

En España, el nuevo ciclo de movilizaciones arrancará en los 90 de la mano de una serie de *laboratorios de acción*, como la campaña *Desenmascaremos el 92* frente a los distintos actos oficiales celebrados ese año o la cumbre alternativa con motivo la reunión del Banco Mundial en Madrid (*50 años bastan*) y las acampadas del 0,7% desarrolladas en 1994. Posteriormente, campañas como las Euomarchas contra el paro y la creciente precarización laboral, a partir de mediados los 90, el Movimiento Anti-Maastricht (creado tras las protestas contra la presidencia española de la Unión Europea en 1995) o, en ciudades como Madrid o Barcelona, Rompamos el Silencio a partir de 1998 fueron espacios que han servido de base de experimentación y sedimentación del nuevo ciclo de movilizaciones. Así mismo, a finales de los 90 comenzarán a consolidarse redes sociales que, con una pata en los nuevos movimientos sociales, apuntarán a visiones globales y de democracia radical en sus planteamientos y acciones: es el caso de Ecologistas en Acción (red de grupos creada en 1998) o aquellos centros sociales que, desde el entorno de la okupación (por ejemplo, los sucesivos

²¹ Esta red estaría integrada, con un intensidad de participación muy variada, por redes de discurso netamente anticapitalista, procedentes del mundo occidental (okupas, sindicatos alternativos, redes del ecologismo político, colectivos de parados franceses, el entorno del MRG en este país) y del llamado Sur (movimientos campesinos como el MST brasileño, el Karnataka State Farmers Union de la India, redes indígenas latinoamericanas como la CONAIE ecuatoriana, sindicatos coreanos). Ver www.agp.org.

Laboratorios en Madrid o los Cines Princesa en Barcelona), abonan un camino para la socialización y la experimentación a través de prácticas más abiertas, menos identitarias.

La progresiva sedimentación del nuevo ciclo de movilizaciones tendrá su repercusión y reflejo en nuestro país en: la emergencia de *nuevas estructuras de participación* como RCADE (Red Ciudadana por la Abolición de la Deuda Externa), ATTAC (Asociación por una Tasación sobre las Transacciones Financieras Especulativas para la Ayuda a los Ciudadanos) o los Movimientos de Resistencia Global (MRG, Hemen eta Munduan en Euskadi) junto a otras plataformas altermundistas; *nuevos espacios de encuentro* (físicos como los foros locales en ciudades y pueblos, o virtuales como el servidor Nodo50 www.nodo50.org); *nuevas herramientas de comunicación* (la red internacional de servidores de información alternativa *Indymedia* tomará asiento en nuestro país, ver barcelona.indymedia.org); *nuevos repertorios de acción* (bloqueos de cumbres, consultas sociales); *fenómenos como la multimilitancia* o la asunción de múltiples referencias en la construcción de identidades individuales y colectivas, que se extienden como una forma de rechazo de referencias monolíticas y de poner en práctica la ideas que lanzan los zapatistas: “los rebeldes han de buscarse entre sí”, somos “un mundo de mundos”.

Podemos hablar de un reflujo, en términos de protestas y visibilidad mediática, a partir de 2004. La búsqueda de una mayor territorialidad, junto con el desgaste de determinados repertorios de acción como las cumbres alternativas (quizás momentáneo tras el éxito de las movilizaciones frente a la reunión del G-8 celebrada en Alemania en el 2007) contribuyeron a que la sedimentación se transformara progresivamente en territorialización, lo que explicaría, junto al contexto por el que atraviesa el país, de renovadas protestas en torno a la vivienda, (ver Calle 2005b).

Cambios en el repertorio de contestación: la modificación de la cultura moderada de protesta española

El ciclo de protesta asociado al MJG está caracterizado, entre otros rasgos, por la generalización de iniciativas de desobediencia civil y la búsqueda de formas alternativas de debate y comunicación pública. Este tipo de acciones cristalizan en diversas iniciativas como consultas ciudadanas y referéndums informales (sobre la deuda externa en 2000, la guerra de Irak en 2003, la Constitución Europea en 2004), ocupaciones de espacios públicos (*reclaim-the-streets*) o la promoción de espacios abiertos de deliberación en Internet (asambleas virtuales, iniciativas *copyleft*, etc.)

La ocupación simbólica de espacios públicos se difunde a partir de la participación de activistas españoles en la contracumbre contra el Banco Mundial de 2001 en Praga

22. Manifestaciones no autorizadas que adoptan este estilo de desobediencia civil no violenta se generalizan durante las protestas que tuvieron lugar en diversas ciudades durante el semestre de la Presidencia española de la UE en 2002 con continuidad en eventos como las manifestaciones durante el 1 de mayo (los “*Maydays*”) desde 2004 y durante las protestas contra la guerra de Irak

Las llamadas a la desobediencia social se generalizan a través de las nuevas redes de contestación global (Iglesias 2002; Calle 2005), cristalizando en la promoción de iniciativas ya en marcha (como la objeción fiscal a los gastos militares de *Alternativa Antimilitarista-MOC*) como otras nuevas como la democratización de tecnologías alternativas (*www.sindominio.net*) o el cuestionamiento del consumismo y las corporaciones internacionales (*www.yomango.org*, *www.boicotpreventiu.org/*).

La rápida recepción en España de nuevos repertorios de desobediencia civil contrasta con el limitado recursos a otras estrategias de acción que también caracterizan el nuevo ciclo de movilización global en otras latitudes, tales como las basadas en la difusión de ideas orientadas a influir en los medios de comunicación o sensibilizar a los ciudadanos (Jiménez y Calle 2007: 93)

La tendencia de los movimientos globales en España

, en contraste con sus equivalentes en otros países europeos, a enfatizar la protesta sobre la búsqueda de bases sólidas para la acción colectiva puede ser explicada por la influencia de la tradición libertaria que favorece la acción sobre la elaboración ideológica y el establecimiento de infraestructuras organizativas (Álvarez 1975: 272) pero también por la escasez de recursos materiales y la ausencia de aliados estables entre las elites institucionalizadas. De esta manera, la contestación se articula en torno a plataformas creadas exprofeso para campañas específicas, cuya actividad se centra en objetivos a corto plazo relativos a la agenda de acciones protesta. Pese a que las campañas incluyen actividades de sensibilización ciudadana, se trata de un trabajo sin continuidad, dado que no suelen tener continuidad en formatos organizativos capaces de realizar labores de sensibilización en el medio o largo plazo.

Para comprender mejor las implicaciones de los movimientos globales en términos de modificación del repertorio de protesta, a modo ilustrativo, la siguiente tabla compara el recurso a algunas formas de movilización colectiva entre activistas del movimiento (de acuerdo con los resultados de la encuesta realizada por Tejerina et al. 2005) y la población en general (de acuerdo con los resultados de la encuesta “Ciudadanía, participación y democracia” realizada en 2002 por el CIS). Las formas de protesta aparecen ordenadas según decrecen las diferencias entre la frecuencia de realización entre activistas y la población en general.

²² No obstante, encontramos antecedentes de esta forma de protesta en diversas prácticas del movimiento okupa como manifestaciones no autorizadas con formato festivo en las que se reclama de manera explícita la recuperación del espacio público para los ciudadanos (Adell 2004).

Tabla 4. El repertorio de protesta entre los activistas del MJG (Jiménez y Calle, 2006)

	% población general*	% activistas del MJG**	Diferencias (% activista MJG/ % población)
Violencia contra propiedad	0,3	8,4	28
Ocupaciones de edificios públicos...	1,5	32,5	21,7
Protesta a través de Internet/móviles	3,6	41,0	11,4
Boicot productos (consumerismo político)	6	47	7,8
Participar en una manifestación	12,9	95,2	7,4
Participar en una huelga	8,2	46,2	5,6
Firmar una petición	23,3	64,5	2,8

***Fuente:** CIS: Estudio 2450 “Ciudadanía, participación y democracia” (2002). Los datos indican los porcentajes de activistas que declaran haber realizado estas formas de protesta en los 12 meses previos a la encuesta.
****Fuente:** Tejerina et al. 2005. Los datos indican los porcentajes de activistas que declaran haber realizado estas formas de protesta (no se establece marco temporal).
******* Los datos indican el ratio de realización de las distintas formas de protesta entre activistas y la población general

Los resultados muestran no sólo, como cabría esperar, que los y las activistas del MJG recurren a las formas de protesta seleccionadas en mayor proporción que la población general, sino que estas diferencias son especialmente notorias respecto a aquellas formas que implican mayores dosis de disrupción así como la utilización de las TIC. Además, este repertorio puede ser vinculado a la presencia de una nueva generación contestataria (Jiménez 2006).

Democracia radical

Junto a la consolidación de un ciclo de protestas de carácter global y al aumento de los repertorios de acción más contestatarios, la democracia radical emerge como paradigma de referencia en el hacer y en el decir de los nuevos movimientos globales (Calle 2005). Más que de una identidad, nos encontramos ante un paraguas que anima a construir desde diferentes culturas de protesta. A grandes rasgos, la meta-narrativa de la democracia radical se caracterizaría por una promoción de la terna diversidad, libertad, solidaridad, expresada así en términos más clásicos (Calle 2007). Desde aquí se impulsan formas de acción y discursos caracterizados por una crítica de las expresiones organizativas verticales (sea la llamada globalización o las estructuras de grandes partidos o sindicatos) y una apuesta por experiencias construidas “desde abajo”. Se busca, siguiendo la estela que, simbólicamente, marcan actores internacionales como el EZLN la construcción de procesos que “reinventen la democracia”, favoreciendo el encuentro entre diferentes mundos. Todo ello en clave de soberanía global: control

financiero de los mercados por parte de la ciudadanía (como proclama ATTAC), soberanía alimentaria para satisfacer localmente las necesidades de la población (Vía Campesina), libre difusión de herramientas comunicativas (redes de creación de software libre), etc.

La diversidad (cultural, política) se lee en clave positiva y sinérgica. “Los rebeldes se buscan”, afirman desde Chiapas. “Somos muchos y diversos [...] pero tenemos también necesidad de construir alianzas y convergencias” se expresaba en el I Foro Social Europeo (2002). El estudio realizado sobre 37 organizaciones españolas recoge en sus manifiestos de presentación la mención a los conceptos de inclusión y respeto a la diversidad de forma explícita en un 21,6% de las organizaciones (Jiménez y Calle 2007). Tanto el fenómeno de la multi-militancia, como la capacidad para construir redes o espacios de convergencia entre tendencias muy diferentes en sus matrices políticas, son expresiones a la vez que retroalimentaciones de esta diversidad. De la misma manera, el consenso se sitúa como herramienta de toma de decisiones para un amplio sector de organizaciones, prueba de ello sería el 35,1% de las organizaciones que lo mencionan entre sus principios en el trabajo citado anteriormente. En general, la idea de diversidad se extiende desde, y a través, de la asunción de una *demodiversidad* (los otros existen) que se separa de identidades cerradas e ideologías omnicomprensivas; también, conectando con nuevos movimientos sociales, esta diversidad pasa por percibir a las personas recorridas por sus lazos corporales, emocionales y racionales (*antropodiversidad*), de ahí la recobrada importancia concedida a fenómenos en clave de “retomar las calles”; y, por último, la diversidad ha de leerse también desde la constatación de que habitamos un planeta muy frágil que es necesario cuidar desde una renovada conciencia de especie (biodiversidad).

El sentido de libertad es evidenciado, en el plano organizativo por la orientación reticular de estas redes, que se extrema con respecto a anteriores culturas de movilización social. Foros locales y mundiales, consultas sociales, redes de nuevo cuño que integran tendencias y visiones diversas, redes de información alternativa a través de internet, entre otras, son expresiones de ello. Libertad que, así mismo, aparece complementada en el plano más discursivo en la insistencia de la democracia como eje central de trabajo: crítica a las organizaciones financieras internacionales y a las multinacionales, rechazo a los grandes tratados económicos en los que la ciudadanía ha jugado un papel de mero espectador, apuesta por construcciones “desde abajo”. En particular, de las 37 organizaciones examinadas, la mitad situaban la democracia como un referente de su acción (Jiménez y Calle 2007).

Por último, la convivencia de culturas y organizaciones de muy diferente proyección y acceso a recursos en grandes espacios de encuentro (desde cumbres alternativas a foros sociales, pasando por campañas frente a la Unión Europea), pondría en evidencia una cultura de solidaridad internas, reforzada por mensajes que, constantemente, hablan de la necesidad de cuidar y compartir bienes comunes: desde el no a las privatizaciones del agua o del conocimiento vía patentes, hasta las críticas por la falta de contenido social de los sucesivos tratados europeos.

En última instancia, podemos afirmar que la democracia radical configura una matriz de relaciones entre las distintas organizaciones y culturas políticas, y que tratamos de resumir en el siguiente cuadro.

Tabla 3. Matriz de democracia radical. (F: construcciones “físicas” relativas principalmente al hacer y estar; C: construcciones culturales en torno al ser, pensar y representar). Fuente: elaboración propia basado en Calle (2007).

D e m o c r a c i a d e s d e a b a j o ; h a c i a r r i b a s e g ú n n e c e s i d a d e s	Valores generales	Lectura más clásica	Ámbitos de realización	Herramienta preferente	Para desarrollar:
	<i>Otros-nomía (sinérgica)</i>	Diversidad o creatividad	Yo (cuerpo, razón, afectos)	Deliberación Sinérgica	Espacios de auto-institucionalidad y de expresión F
			Sociedad (políticas, economías, culturas, género)		Traducción, diversidad saberes C
			Territorio (contexto, biodiversidad)		Cultura crítica y de aprendizaje C
	<i>Auto-nomía (global)</i>	Libertad o emancipación	Personal	Proximidad Global	Re-dimensionar hacia abajo F
			Social/comunitaria		Confianzas e identidades abiertas C
			Global		Espacios próximos de decisión y satisfacción de necesidades C y F
	<i>Dignidad (común)</i>	Igualdad o solidaridad	Compleja (bienes diversos, ninguno dominante)	Participación real	Política activa de bienes comunes C y F
			Presente (justicia, cuidados, sostenibilidad)		Horizontalizar y reticularizar relaciones C y F
			Futura (generaciones, planeta, especies)		Espacios abiertos e igualitarios de comunicación F

Por *deliberación sinérgica* se entiende un “respecto activo”, un “interés positivo”, un “los rebeldes se buscan” en el lenguaje neo-zapatista. Por *proximidad global*, aparecen una multitud de experiencias

vinculadas a la articulación de nuevas formas de satisfacer necesidades básicas desde nuestro entorno, desde la cotidianeidad pero, a diferencia de los nuevos movimientos sociales, considerando su actuar en un marco global (internacional y de interrelación de problemáticas y culturas). Ejemplo de ello serán las apuestas por cooperativas agroecológicas, los movimientos en defensa del territorio y frente a la especulación urbanística o la exploración de cooperación social a través de nuevas tecnologías que facilitan la creación compartida y el intercambio de servicios o de bienes (desde el software libre hasta las licencias *creative commons*). En dicha línea, la *dignidad* hermanaría la igualdad y la solidaridad en el despliegue de una participación real: personas que cooperan y tienen interés en otras personas como forma de satisfacer sus propias necesidades.

Podemos visualizar esta matriz como un poliedro de valores, herramientas y propuestas concretas en las que se insertan o entrelazan, con distinta profundidad, diferentes culturas movimentistas, presentes y pasadas, que generan una tradición de apuesta por una democracia radical que va siendo pronunciada según contextos y raíces ideológicas.

En el trasfondo nos encontramos con una apuesta por la construcción de una *sociedad convivencial*, a través de nuevos entornos culturales y organizativos que faciliten que las herramientas organizativas (e institucionales en general), se encuentren más cerca de la ciudadanía y sirvan para democratizar los lazos sociales. En efecto, la democracia radical podría sintetizarse como aquellas propuestas y prácticas que tienen en el ánimo de la *cooperación social* y la *horizontalidad* su orientación y asiento para la construcción de vínculos convivenciales dirigidos, activa y globalmente, a la satisfacción conjunta de necesidades básicas, integrando “*desde abajo*” las esferas económicas, políticas, culturales y medioambientales en las cuales nos vamos moviendo. En última instancia estas expresiones de democracia se manifestarían a través de los nuevos movimientos globales como experiencias que tratan de rebatir la instauración de una sociedad dócil, definida por una democracia autoritaria cuyo mecanismo esencial de reproducción no serían ni la participación ni la deliberación de la ciudadanía, sino la búsqueda de aclamaciones sociales, construidas sobre corrientes de opiniones públicas que emergen tras la

Comentarios finales

Como conclusión más relevante podemos decir que, superado el efecto de la “transición pactada”, la década de los 90 supuso una fuerte evolución de discursos y repertorios de acción en los movimientos sociales del Estado español, una evolución que supuso el lanzamiento de protestas “antiglobalización” y de los nuevos movimientos globales en este país. En algunos casos, estos

cambios supusieron la acentuación de características existentes (como la descentralización), y en otros casos la tendencia supuso un giro de perfiles generales anteriores (aumento de capacidades de coordinación, radicalización de discursos y repertorios). Estos cambios se han acentuado y se han hecho más visibles como consecuencia del ciclo internacional de protestas, y también por el ciclo local marcado por el contexto político doméstico, con un partido conservador en el poder y un apoyo institucional desde grupos de izquierda a estos movimientos sociales. La orientación de estos cambios habría resultado en la recreación de un paradigma de “democracia radical” (horizontalidad, hipersensibilidad frente al poder, democracia como eje de trabajo, etc.) como sustrato común de las redes que se sitúan en la órbita de los nuevos movimientos globales.

Referencias

Adell, R. 2000. “Los movimientos sociales en los noventa: volumen y actores de la movilización”, en Grau, E. y P. Ibarra. *Anuario movimientos sociales. Una mirada sobre la Red*. Barcelona: Icaria, pp. 27-54.

Ajangiz, R. “Movimiento pacifista: una crisis que no es tal” en Grau, E. y P. Ibarra. *Anuario movimientos sociales. Una mirada sobre la Red*. Barcelona: Icaria, pp. 165-184

Álvarez, J. 1995. “Movimientos sociales en España: del modelo tradicional a la modernidad post-franquista”. Madrid : Instituto Universitario Ortega y Gasset.

Baiges, S., D. Dusster, E. Mira y R. Voladomat. 1996. *Las ONG de desarrollo en España*. Barcelona: Ediciones Flor de Viento.

Barreiro, B. 2000. *Democracia y conflicto moral: la política del aborto en España e Italia*. Madrid: Istmo.

Calle, Ángel. 2004. “Okupaciones. Un movimiento contra las desigualdades materiales y expresivas”, in F. Tezanos (ed.), *Tendencias en desigualdad y exclusión social*. Madrid, Sistema.

Calle, Ángel. 2005. *Nuevos Movimientos Globales. ¿Hacia la radicalidad democrática?*, Madrid, Editorial Popular.

Calle Collado, Ángel (2005b): “Tiempos de reflujo y sedimentación”, en Grau, Elena e Ibarra, Pedro (coord.) *Anuario de movimientos sociales. La política en la red*, Barcelona, Icaria/Betiko Fundazioa.

Calle, Ángel 2007. “La democracia (radical) a debate: los nuevos movimientos globales”, *IX Congreso español de Sociología*, Federación Española de Sociología (FES), Grupo Movimientos Sociales y Acción Colectiva, Barcelona 13, 14 y 15 de Septiembre de 2007. (disponible en www.iesa.csic.es/archivos/Comunicaciones/CALLE.pdf)

Calle, Ángel 2008. “La producción social de la democracia (radical)”, en *Rojo y Negro*, mayo 2008 (disponible en <http://www.cgt.org.es/spip.php?article878>)

Castells, M. 1986. *La ciudad y las masas: sociología de los movimientos sociales urbanos*. Madrid: Alianza Editorial.

- Cortavitarte, E. 2000. "El movimiento obrero en el estado español: entre el coporatimos y las alternativas transformadoras", en E. Grau y P. Ibarra (Coordinadores), *Anuario de movimientos sociales. 1999. Una mirada sobre la red*. Barcelona: Editorial Icaria, pp. 55-76.
- Cruells, D. 2002. "Otro mundo es posible... en femenino", en E. Grau y P. Ibarra (coord.), *Anuario de movimientos sociales de 2001. El futuro de la red*. Barcelona: Icaria Editorial, pp. 106-108.
- de la Fuente, I. 1984. "El pacifismo español levanta el vuelo", *Tiempo de Paz*, 1: 50-59.
- Della Porta, Donatella (coord.) (2007): *The Global Justice Movement: Cross-national and Transnational Perspectives*, Nueva York, Paradigm Publishers.
- Diani, M. 1995. *Green networks. A structural analysis of the Italian environmental movement*. Edinburgh: Edinburgh University Press.
- Escario, P., I. Alberdi y A.I. López. 1996. *Lo personal es político : el movimiento feminista en la transición*. Madrid: Instituto de la Mujer.
- Folguera, P. (Ed.) 1988. *Feminismo en España : dos siglos de historia*. Madrid : Editorial Pablo Iglesias.
- Gomà, R. y J. Subirats (Coords.). 1998. *Políticas públicas en España. Contenidos, redes de actores y niveles de gobierno*. Barcelona: Editorial Ariel.
- Gomà, R., E. Alfama, R. González, L. Peláez and G. Vargas. 2004. "La red crítica global en Cataluña en los albores del siglo XXI", paper presented at the VIII Congreso Español de Sociología, Alicante.
- Gomáriz, E. 1984. "OTAN: Por un debate clarificador", *Tiempo de Paz* (2): 78-85.
- Gomáriz, E. 1987. "El movimiento por la paz en España", *Revista Internacional de Sociología*, 45 (3): 549-565.
- Gordillo, J.L. 1999. "El movimiento pacifista y la guerra de Yugoslavia" en Grau, E. y P. Ibarra. *Anuario movimientos sociales. Una mirada sobre la Red*. Barcelona: Icaria, pp. 185-190.
- Gunther, R. 1992. "Spain. The very model of modern elite settlement", en Higley, J. y R. Gunther (Eds.), *Elites and Democratic Consolidation in Latin America and Southern Europe*. Cambridge and New York: Cambridge University Press.
- Gutiérrez, V. 2004. "Okupación y movimiento vecinal", en R. Adell y M. Martínez (Coordinadores) *¿Dónde están las llaves? El movimiento ocupa: prácticas y contextos sociales*. Madrid: Los Libros de la Catarata, pp. 115-128.
- Herreros, T. 2004. "Movimiento de ocupaciones y movimientos sociales: Elementos de análisis para el caso de Cataluña", en R. Adell y M. Martínez (Coordinadores) *¿Dónde están las llaves? El movimiento ocupa: prácticas y contextos sociales*. Madrid: Los Libros de la Catarata, pp. 129-150.
- Jaime-Jiménez, O. y F. Reinares 1998. "The policing of mass demonstration in Spain: From dictatorship to democracy", en della Porta, D. y Herbert Reiter. *Policing protest. The control of mass demonstrations in western democracies*. Minneapolis: University of Minnesota Press.
- Jiménez, M. 2005. *El impacto político de los movimientos sociales. Un estudio de la protesta ambiental en España*. Colección Monografías, 214. Madrid: CIS-Siglo XXI.
- Jiménez, M. 2006. "El movimiento de justicia global: una indagación sobre las aportaciones de una nueva

generación contestataria”, *Revista de Estudios de Juventud*, 75: 29-41.

Jiménez, Manuel y Calle, Ángel (2007): 2007 “The Global Justice Movements in Spain”, en della Porta, Donatella (Ed) *The global justice movement: A cross-national and transnational perspective*. Paradigm Publishers, pp. 79-102 “

Jiménez, Manuel y Calle, Ángel (2007b): “Les nouveaux mouvements globaux en Espagne, en Isabelle Sommier, Olivier Fillieule et Eric Agrikoliansky (coord.), *Généalogie du mouvement antiglobalisation en Europe. Une perspective comparée* Paris, Karthala, pp. 143-166

Karl, T. L. 1990. “Dilemmas of democratization in Latin America”, *Comparative Politics*, 23 (1): 1-21.

Laraña, E. 1999. *La construcción de los movimientos sociales*. Madrid: Alianza Editorial.

Maravall, J.M. 1985, *La política de la transición*. Madrid: Taurus (reimpresión de la 2ª edición de 1984).

Martínez, M. 2004. “Del urbanismo a la autogestión: una historia posible de la Okupación en España”, en R. Adell y M. Martínez (Coordinadores) *¿Dónde están las llaves? El movimiento ocupa: prácticas y contextos sociales*. Madrid: Los Libros de la Catarata, pp. 61-88.

McCarthy J. D. y Mark Wolfson. 1996. “Resource mobilization by local social movement organizations: Agency, strategy, and organization in the movement against drinking and driving”, *American Sociological Review*, 61(6): 1070-1088.

Minkoff, D.C. 1994. “The institutional structuring of organized social action, 1955-1985, *Research in Social Movements, Conflicts and Change*, 17: 135-171.

Ortega, M. L. 1994. *Las ONGD y la crisis del desarrollo*. Madrid: IEPALA, Publicaciones ETEA.

Parrado, S. 1996. *Elites de la Administración Estatal, 1982-1991: estudio general y pautas de reclutamiento*. Sevilla: Instituto Andaluz de Administración Pública.

Pastor, J. 1998. “La evolución de los nuevos movimientos sociales en el Estado español” en Ibarra, P. y B. Tejerina (Eds.) *Los movimientos sociales. Transformaciones políticas y cambio cultural*. Madrid: Editorial Trotta.

Pastor, J. 1999. “El ‘Déficit Social’ de la participación política no electoral. Iniciativas ciudadanas y movimientos sociales”. *Documentación Social*, 114: 125-141.

Prevost, G. 1993. “The. Spanish peace movement in a european context”, *West European Politics*, 16: 144-164

Rodríguez, V. 2003. “El movimiento vecinal y la inmigración” en E. Grau y P. Ibarra (coord.), *Anuario de movimientos sociales de 2002. Nuevos escenarios, nuevos retos en la red*. Barcelona: Icaria Editorial, pp. 47-60.

Rucht, D. 1988. “Themes, logics and arenas of social movements. A structural approach”, *International Social Movement Research*, 1: 305-328.

Sampedro, V. 1997. *Debates sin mordaza: desobediencia civil y servicio militar, 1970-1996*. Madrid: Boletín Oficial del Estado; Centro de Estudios Constitucionales.

Subirats, J. y R. Gomà. 1998a. ‘Democratización, dimensiones de conflicto y políticas públicas en España’, en Gomà, R. y J. Subirats (Eds.). *Políticas públicas en España*. Barcelona: Editorial Ariel.

Veredas, S. 2003. "Las asociaciones de inmigrantes en España", *Revista Internacional de Sociología*, 39: 207-225.

Valiente, C. 1994. "Feminismo de estado en España: el Instituto de la Mujer, 1983-1994". *Estudios/Working Papers*, Instituto Juan March de Estudios e Investigaciones, 58. Madrid: Instituto Juan March de Estudios e Investigaciones, Centro de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales.